

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS
DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA
POLÍTICA

TÍTULO:

CORRUPCIÓN Y GOBERNABILIDAD

HACIA UN AVANCE PARA UN MEJOR GOBIERNO

TEMÁTICA:

CORRUPCIÓN Y GOBERNABILIDAD

ALUMNO:

YANINA ALEJANDRA ARIOTTI

PROFESOR TUTOR:

LIC. LUCAS A. ARCA MENA

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fecha de entrega: 26-04-2012

Mail: gianny_aa@hotmail.com

INDICE

1. INTRODUCCION	3
2. CAPITULO 1	
<i>Presentación, formulación y justificación del problema</i>	
i. Presentación de los hechos	6
ii. Planteo del problema	10
iii. Objetivos	10
3. CAPITULO 2	
<i>Marco teórico</i>	
i. Corrupción	12
ii. Gobernabilidad	26
iii. Relación entre corrupción y gobernabilidad	35
4. CAPITULO 3	
<i>Diseño metodológico</i>	
i. Hipótesis	45
ii. Diseño de la prueba de hipótesis	45
➤ Período de tiempo	45
➤ Unidades de análisis	45
➤ Definición conceptual de las variables	46
➤ Definición operacional de las variables	48
iii. Procesamiento de datos	50
5. CAPITULO 4	
<i>Presentación, análisis e interpretación de los datos</i>	
i. Presentación y análisis de los datos por país	53
ii. Análisis e interpretación de los datos para Latinoamérica	68

6. CONCLUSIONES	77
7. BIBLIOGRAFÍA	83
8. ANEXOS	88



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

INTRODUCCIÓN

La corrupción y la gobernabilidad son materias de preocupación y continuo debate en el mundo entero. En especial las acciones y estrategias para prevenirla, han ido adquiriendo mayor relevancia en las últimas décadas del siglo XX y tienen especial interés en el primer decenio del XXI.

La corrupción política genera graves consecuencias en todos países - desarrollados o en vías de desarrollo-, tanto en la esfera social, como en la económica, cultural y política. Sin embargo, por mucho tiempo se argumentó que, a pesar de ser preocupaciones reconocidas, corrupción y gobernabilidad no eran consideradas centrales para el desarrollo económico. Incluso en algunas ocasiones, la corrupción era considerada necesaria para aceitar los mecanismos burocráticos que dificultan el desarrollo y la eficiencia gubernamental.

Con la conformación del Estado neoliberal -reducción del aparato estatal, desregulación económica, ola de privatizaciones, y el extensivo e intensivo, proceso de globalización-, se han modificado las formas de entender la economía y los intercambios comerciales internacionales. El mercado mundial, creado como consecuencia de dicho proceso, configura un grupo sensible a los casos de corrupción, donde se incentiva la libre circulación de capitales y cuyos agentes principales son las empresas multinacionales y los bancos. La eliminación de las barreras y los controles, la transnacionalización de las operaciones, entre otros efectos del proceso de globalización, genera una mayor dificultad para detectar y prevenir hechos de corrupción.

El estallido mediático a nivel mundial influyó en la dimensión que tomaron los reiterados escándalos de corrupción. La consecuente preocupación por tales actos, y la necesidad de establecer claras acciones para prevenirlos, tomaron un destacado lugar en las agendas de los Estados y los organismos internacionales¹. A partir de la introducción de la temática en los foros

¹ Algunos de los Organismos Internacionales que establecen convenciones y mecanismos de seguimiento destinados a la prevención y lucha contra la corrupción son: la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Transparencia Internacional (TI), Banco Mundial, (BM), entre otras. Las convenciones referidas son: Convención *Interamericana*

internacionales, se fue generalizando la inquietud y se comenzaron a desarrollar propuestas para el establecimiento de políticas atinentes a la prevención y lucha contra la corrupción, incrementándose el número de programas y agencias donantes en apoyo a programas específicos destinados a tratar el problema. La preocupación hoy en día se centra especialmente en países en vías de desarrollo donde, según estudios realizados por el Banco Mundial, este problema se ha generalizado. Los organismos internacionales, con el propósito de configurar un instrumento universal en la materia, elaboran diagnósticos y análisis de sus consecuencias, desarrollan herramientas de lucha contra la corrupción, así como de asistencia y cooperación, disponibles para cualquier país que quiera implementarlo.

A medida que el proceso de institucionalización de la democracia se afianzaba, junto con la apertura de los mercados, el desarrollo de las libertades políticas y civiles, y el crecimiento de los medios de comunicación masivos, las preocupaciones se fueron trasladando poco a poco hacia la calidad de las instituciones democráticas, tomando gran relevancia la incidencia e importancia de la corrupción política en la gobernabilidad de los países.

En un principio, se comenzó a discutir el problema de la corrupción y la gobernabilidad en las sociedades capitalistas avanzadas, que a diferencia de América Latina, gozaban de una gran estabilidad de las instituciones democráticas -por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, gran parte de las naciones que integran Latinoamérica, se caracterizan por pertenecer a los países que volvieron al sistema democrático en la denominada Tercer Ola de Democratización², con instituciones débiles y desigualdad de ingresos y oportunidades. Es decir, dichos países no sólo tuvieron que enfrentar problemas de consolidación democrática, sino también cuestiones relativas a la debilidad de las instituciones, el bajo desarrollo económico y la creciente pobreza. Sin bien la Tercer Ola de democratización,

Contra la Corrupción (CICC), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y Convención Sobre la Lucha Contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

² Huntington, Samuel. *La Tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX*. Barcelona - Buenos Aires - México: Ed. Paidós, 1994.

no aseguraba su instauración, fomentó la liberación de un enorme conjunto de fuerzas populares, sociales y políticas que habían estado suprimidas durante el período anterior. Dichas transiciones en América Latina fueron objeto de gran teorización en los '80. Hoy en día, luego de varios años de democracia –con todas las dificultades que cada país atravesó-, la preocupación central se está trasladando poco a poco de la consolidación hacia la calidad democrática, que conduciría a un mayor grado de desarrollo social y económico.

En un primer intento por definir la problemática a analizar, se puede afirmar que la corrupción política es el uso de recursos públicos para beneficio de unos pocos, en lugar de ser utilizados en beneficio del conjunto de la sociedad. Esto, no sólo genera mayor desigualdad e injusticia, sino que afecta los derechos de los ciudadanos, dado que el desvío de los capitales hacia un grupo reducido de individuos particulares va en detrimento del resto y su arraigo menoscaba la legitimidad del Estado. Ésta a su vez, es uno de los componentes esenciales de la gobernabilidad, entendida como la calidad (buen o mal gobierno), el estado (equilibrado, estable o inestable) o una propiedad significativa (eficacia, eficiencia) de las acciones y los efectos de gobernar.

Considero que el control de la corrupción resulta de vital importancia como política de Estado para el mejor desarrollo socioeconómico y político del país, ya que un gobierno transparente es más eficaz y eficiente para responder a las demandas sociales y, así, generar estabilidad política. Es por ello que resulta imprescindible para mejorar los niveles de gobernabilidad. Es útil, en este sentido, establecer de forma clara las relaciones causales entre corrupción y gobernabilidad, y las consecuencias que acarrearán, la generalización de la primera y los déficits de la segunda, para poder establecer un orden de prioridades y formular políticas eficaces y eficientes que tiendan a la disminución de tales problemas y a un mejoramiento considerable en las condiciones de vida de la población.

CAPITULO 1

Presentación, formulación y justificación del problema

i. Presentación de los hechos y justificación

La corrupción política ha viciado por mucho tiempo a los sistemas políticos latinoamericanos. Estas prácticas menoscaban las democracias del continente y se vuelven un obstáculo para la gobernabilidad.

Los escándalos de corrupción en las últimas décadas golpearon a muchos gobiernos de América Latina. A continuación se exponen algunos de los más resonantes.

En República Dominicana, luego de la dictadura de Rafael Trujillo, los gobiernos de los ex mandatarios, Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán estuvieron caracterizados por las reiteradas denuncias de prácticas corruptas. En el transcurso del 2000, con la caída del primer gobierno de Leonel Fernández, han surgido una serie de acusaciones por corrupción generalizada (contratos ilícitos, malversación de fondos, pensiones falsas) a miembros de su gabinete, que han ido incrementando a lo largo de sus tres mandatos. Durante su campaña en 2008 enfrentó varios alegatos de fraude por parte de la oposición, acusándolo de utilizar recursos públicos para obtener su reelección. A principios de 2010 se lo volvió a acusar de lo mismo tras apoyar las candidaturas a congresales de su partido. En 2011 los escándalos y denuncias de corrupción no hicieron más que crecer en magnitud y cantidad, quedando la mayoría impune.

En Ecuador, el gobierno de Bucaram se vio en medio de una enorme cantidad de denuncias por delitos de corrupción, como el caso de “la mochila escolar”, malversación de fondos por parte de funcionarios públicos, nepotismo, enriquecimiento ilícito, y el escándalo de la fiesta organizada por su hijo menor en celebración de haber ganado su primer millón de dólares tras cinco meses a cargo de las aduanas. Asimismo, el ex vicepresidente de Ecuador Alberto Garzón, fue encontrado culpable por la Corte Suprema de corrupción y

peculado, quien luego terminó fugándose al extranjero y fue declarado prófugo de la justicia ecuatoriana. El ex presidente durante 1998-2000, Jamil Mahuad, fue involucrado en muchos casos de corrupción que incitaron protestas masivas y su huida del país en enero 2000. El 13 de julio la Corte Suprema de Justicia de Ecuador dictó una orden de prisión en contra Mahuad acusándolo de "malos manejos administrativos".

En Venezuela, el ex presidente Carlos Andrés Pérez fue suspendido de sus funciones en 1993 e inculcado penalmente por supuestas prácticas de corrupción. La Corte Suprema de Justicia lo condenó por el delito de malversación a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario.

Juan Carlos Wasmosy, presidente de Paraguay durante el período 1993-98, fue condenado en abril de 2002 a cuatro años de prisión por haber otorgado ilegalmente un préstamo de 42.500 millones de guaraníes al Banco de Desarrollo —el cual se encontraba en quiebra al momento— durante su gobierno. También ha sido acusado de involucramiento en otros casos de corrupción, como las operaciones "fraudulentas" vinculadas con la construcción de la represa de Itaipú, la mayor central hidroeléctrica del mundo. Las acusaciones por malversación de fondos y peculado continuaron en los siguientes mandatos presidenciales del país.

En Bolivia, el ex presidente Jaime Paz Zamora y el Subdecano de la Corte Suprema fueron sometidos, en 1994, a un juicio de responsabilidades por actos de corrupción y condenados.

En Colombia, país muy afectado por la corrupción y su vinculación con el narcotráfico, el ex presidente Samper y varios de sus ministros fueron sometidos, en marzo de 1996, a un proceso judicial por haber recibido importantes donaciones de narcotraficantes para la campaña electoral que los llevó al poder.

En Brasil el caso más resonante es el del ex presidente, Fernando Collor de Mello. El mismo habría ganado elecciones presentándose como candidato independiente, sin conexión con los partidos políticos tradicionales y con una agenda de reformas basada sobre todo en la eliminación de la corrupción pública. Sin embargo, en 1992, su hermano lo acusó de participación en una

serie de actividades corruptas por medio de su director de campaña política. El Congreso conformó entonces una comisión para investigar tales acusaciones, la cual reveló varios casos de corrupción perpetrados tanto por el director de la campaña política como por parte de Collor de Mello. Dada las protestas populares que originó el informe, se le realizó juicio político por el que se lo destituyó de su cargo -al cual ya había renunciado-, y se le suspendieron los derechos políticos por 8 años. Uno de los posibles agentes que pudiera haber facilitado la corrupción en aquél gobierno fue justamente la ausencia de vínculos con los partidos políticos, generando una gran concentración de poder en la presidencia. No obstante, esta ausencia de alianzas partidarias, a su vez, facilitó el voto destituyente del Congreso.

En Perú, está el caso de Alan García, quien llegó al poder al frente del partido APRA, el cual no había logrado ningún triunfo anteriormente. García obtuvo un apoyo popular muy fuerte y gran parte de su campaña se basó en promesas de reformas institucionales y eliminación de la corrupción. Sin embargo, su gobierno fracasó en las reformas anunciadas y pronto comenzó a beneficiarse de los mismos actos de corrupción que habían cometido los gobiernos anteriores. Posteriormente, Fujimori fue electo en un clima de desesperanza y decepción, producto de las corruptas administraciones anteriores. Después de diez años de gobierno poco transparente, se vio asediado por las denuncias de prácticas corruptas -que pudieron comprobarse transcurrido pocos meses de su tercer mandato, con la colaboración de su asesor Vladimiro Montesinos-, y decidió renunciar desde Tokio. Actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y 7 años y medio por haberlo hallado culpable de "peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado".

En la República Argentina, un caso paradigmático es el del actual senador y ex presidente, Carlos Menem, procesado por omisión maliciosa de bienes, falsificación de documento público, fraude al Estado, enriquecimiento ilícito y contrabando de armas, entre otros. El caso de María Julia Alsogaray, ex Secretaria de Medio Ambiente durante los 90's, quien fuera recientemente condenada por enriquecimiento ilícito, tras haberse multiplicado exponencialmente su patrimonio durante su gestión. Otro caso de gran

relevancia de la época, fue el de IBM-Banco Nación, en el que se denunciaron coimas en el contrato Plan Centenario entre el banco y la multinacional.

Sólo por mencionar algunos de los más importantes de la última década, se pueden señalar, las coimas en el Senado, causa en la que está implicado el ex presidente Fernando De La Rúa, presuntamente por haber indicado el pago de sobornos a senadores opositores para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral. El caso Skanska, que tuvo su origen en 118 facturas fraudulentas de 23 empresas diferentes que esta compañía sueca incorporó a sus declaraciones juradas para evadir impuestos, aunque luego se sospechó que la maniobra no se dirigió a eludir las cargas impositivas, sino a ocultar coimas en el marco del proyecto de ampliación de un gasoducto, obra impulsada desde el Ministerio de Planificación Federal. Las reiteradas denuncias de sobreprecios, coimas y pagos "injustificados" por parte del Ministerio de Planificación fueron investigadas en la justicia. Recientemente, un fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, determinó que no hubo sobreprecios ni coimas, y por lo tanto, sobreseyeron a los funcionarios e imputados en la causa. Sin embargo, la misma se seguirá tramitando en el fuero penal tributario, donde también se investiga la causa. El escándalo de la valija, en el cual están involucrados funcionarios argentinos, estadounidenses y venezolanos, originado tras el ingreso al país de una delegación de funcionarios argentinos y empresarios en un vuelo charter, en el cual se descubrió la portación de un maletín con USD 800.000 sin declarar, es otro de los casos de corrupción relevantes, que continúan siendo investigados.

El estudio acerca de la calidad de gobierno, junto con el análisis institucional, ha adquirido gran importancia en las últimas décadas. Como sostienen algunos teóricos, este creciente interés puede deberse a una gran cantidad de trabajos empíricos que establecen correlaciones entre la calidad institucional y el grado de desarrollo de los países. Asimismo, se encuentra muy generalizada la idea de que una buena gobernabilidad resulta de vital importancia para la formulación de políticas efectivas, tanto a nivel económico, social y político. A la vez, existe una gran necesidad de contar con políticas adecuadas e instituciones sólidas para poder acceder a préstamos, ser beneficiarios de donaciones de organismos internacionales, generar mayor